

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2023-00278-00
DEMANDANTE:	FRANCY YANETH GARZÓN TIQUE
DEMANDADO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
CONTROVERSIA:	EJECUTIVO LABORAL

La señora Francy Yaneth Garzón Tique, a través de apoderado judicial, presenta memorial de demanda ejecutiva solicitando se libre mandamiento de pago en su favor y en contra de la **Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.**, con el fin de obtener el pago resultante del cumplimiento del fallo proferido el 02 de abril de 2019, proferido por este Despacho Judicial. – confirmado parcialmente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” – el 27 de abril de 2021.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

En este momento procesal correspondería librar mandamiento de pago en contra de la entidad ejecutada; sin embargo, debido a unas falencias que se observan, se procederá a precisarlas y otorgar plazo para su corrección.

Cabe destacar que en el asunto sub examine, por tratarse de un proceso ejecutivo, en principio no sería factible inadmitir la demanda, sin embargo, en aras de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la primacía del derecho sustancial sobre el formal, cuando se observen falencias de requisitos formales en la demanda ejecutiva es procedente que ésta sea inadmitida para que se efectúen las correcciones pertinentes y así continuar con el normal curso del proceso. Sobre lo aquí expuesto el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

*“Así las cosas, en los procesos ejecutivos el juez no puede inadmitir la demanda y ordenar al ejecutante corregirla, por ejemplo, aportando los documentos necesarios para configurar el título ejecutivo. No obstante, lo anterior, la Sala considera pertinente reiterar que, en el proceso ejecutivo, **si bien no es posible inadmitir la demanda para que el ejecutante complete el título presentado, sí lo es para que se corrijan los requisitos formales** establecidos en el art. 85 del C.P.C. En el proceso ejecutivo nada se prevé sobre este trámite, razón por la cual es necesario remitirse a las disposiciones generales del estatuto procesal civil. En providencia del 16 de junio de 2005, esta Sala acogió la tesis doctrinal según la cual es posible corregir los defectos formales de la demanda pues, lo contrario, implica una rigidez que carece de sustento legal y que se encontraría en contravía del principio constitucional de primacía de la sustancia sobre la forma. De igual manera, implicaría una vulneración del derecho de acceso a la Administración de Justicia, pues, con argumentos meramente formales, se impediría la puesta en marcha del aparato judicial. **Lo anterior no obsta para que la Sala reitere su posición según la cual no puede el juez de la demanda ejecutiva, en cualquier caso, inadmitirla con el propósito de permitir al demandante completar, adicionar o mejorar o, en general, variar el título ejecutivo presentado ab initio de modo insuficiente.** En este caso, el Tribunal inadmitió la demanda para que, en su criterio, se subsanara el título ejecutivo, conducta que, como se anotó, no resulta procedente en juicios ejecutivos, decisión que, de todas maneras, se respetará puesto que la irregularidad anotada no configura causal de nulidad, de aquellas que puedan decretarse de oficio o en el trámite de la segunda instancia”¹. (Negrilla fuera de texto).*

Teniendo en cuenta lo expuesto, la citada jurisprudencia otorga al Juez de conocimiento la posibilidad de conceder un plazo para corregir la demanda ejecutiva por razones puramente formales.

Conforme a lo anterior, se procederá a analizar la demanda ejecutiva presentada:

Por sentencia del **02 de abril de 2019**, el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. **2015-908**, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, confirmada parcialmente y revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” – el **27 de abril de 2021**, a través de la cual declaró la existencia del contrato realidad entre la señora Francy Yaneth Garzón Tique y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – durante los periodos comprendidos entre: 01 de julio de 2003 y el 30 de noviembre de 2006; el 02 de enero de 2007 y el 30 de abril de 2012 y entre el 01 de agosto de 2012 y el 30 de septiembre de 2012; asimismo, ordenó a la entidad demandada, reconocer y pagar **i)** la totalidad de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales devengados por los empleados de planta, tomando como base los honorarios pactados en los contratos de arrendamientos de servicios personales – desde el 01 de julio de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2012 (descontando los

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil seis (2006), Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00993- 01(30566), Actor: CONSTRUCA S.A., Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

días de interrupción); **ii)** tomar el ingreso base de cotización de la demandante (honorarios pactados) mes a mes, y si existiere diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar al sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, cotizar la suma faltante solo en el porcentaje que le corresponda como empleador, donde la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó durante sus vínculos contractuales y en caso, de no haberlas hecho o existir diferencias en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, el porcentaje que le correspondía como trabajadora – por el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2012.

Respecto al pago a la demandante de los dineros correspondientes como cotizaciones a la Caja de Compensación Familiar (numeral tercero - literal **iii)**) y la prescripción extintiva – señalada en el numeral QUINTO, fueron revocados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – mediante la citada providencia del 27 de abril de 2021, la cual cobró **ejecutoria el 08 de junio de 2021**.

El día 31 de julio de 2023, la parte demandante presentó demanda ejecutiva en catorce (14) folios, en la que solicita se libre mandamiento ejecutivo a favor de la señora Francy Yaneth Garzón Tique y en contra de la **Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.**, teniendo como título de recaudo las sentencias proferidas por este Despacho el 02 de abril de 2019 – confirmada parcialmente y revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – el 27 de abril de 2021, la cual cobró **ejecutoria el 08 de junio de 2021**, procediendo a indicar los valores sobre la cual pretende que se libre mandamiento de pago por concepto de **capital, indexación** – sobre los factores salariales y prestacionales correspondiente a: cesantías, prima de Navidad, Vacaciones, prima de Vacaciones, prima de Servicios y Bonificación por servicios prestados, **e intereses moratorios – conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA**, sin que aporte copia de la sentencia de primera instancia y la constancia de ejecutoria.

De otra parte, teniendo en cuenta que no fueron aportadas las sentencias de primera y segunda instancia y que revisado el Proceso ordinario 2015-908, dichas documentales obran en el citado expediente digital, **por Secretaría del Juzgado incorpórese** al proceso de la referencia (2023-278) - la sentencia de primera instancia proferida por este Despacho y sentencia segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

con su respectiva constancia de ejecutoria.

Conforme a lo expuesto, la parte demandante deberá corregir lo siguiente:

1. Allegue solicitud de cumplimiento de sentencia ante la entidad ejecutada con su respectiva constancia de radicación, teniendo en cuenta que no obra en el expediente digital de la referencia.
2. Asimismo, en caso de solicitar intereses moratorios, deberá aclarar que intereses exige y desde que fecha, teniendo en cuenta que, para reclamar el pago de intereses moratorios deberá tenerse en cuenta la fecha de constancia de ejecutoria de la sentencia y la fecha de presentación de solicitud de cumplimiento de sentencia - conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
3. Asimismo, deberá llegar constancia de ejecutoria de sentencia, teniendo en cuenta que si bien, en el acápite de “MEDIOS DE PRUEBA”, manifiesta que obra en el expediente, se precisa que revisados los archivos del expediente digital (2015-908 y 2023-278) no obra copia de esta.
4. Allegue certificación de las prestaciones sociales y acreencias laborales devengados por un empleado de planta para el **periodo comprendido entre el 01 de julio de 2003 al 30 de septiembre de 2012** – de acuerdo al cargo que ostentaba la ejecutante de haber lugar a ello, teniendo en cuenta que en la demanda ejecutiva, indica que la entidad ejecutada – Subred Integrada de Servicios Salud Sur E.S.E. no incluyó en la liquidación el factor correspondiente a la **prima de Servicios y la Bonificación por Servicios Prestados** y con el fin de observar una liquidación clara y precisa de las sumas adeudadas a la ejecutante.

En el mismo sentido, se pondrá de presente la posición que ha sido planteada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que al respecto conceptuó² :

² 2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO, Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), Radicación número: 11001-03-06-000-2012-00048- 00(2106), Actor: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Referencia: Criterios para cumplir las sentencias

- A. *La indexación y los intereses moratorios concomitantes* El fundamento legal de la indexación, según el Consejo de Estado, reside en artículo 178 de Código de lo Contencioso Administrativo, que a la letra dispone:

“ARTICULO 178. AJUSTE DE VALOR. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”

En este punto, la Corporación ha venido señalando que el ajuste de las sentencias condenatorias obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que en tratándose de servidores del Estado, disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus ingresos, por lo que la indexación es un acto de equidad, cuya aplicación se sustenta además en el artículo 230 de la Constitución Política, que dispone:

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”

Es así que cuando se ordena el restablecimiento del derecho con la indexación, se busca que dicho restablecimiento “represente el valor real al momento de la condena que es el equivalente al perjuicio recibido.”

Se precisa además que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado que “en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles”, por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.

En tal medida, cuando en la condena judicial de reintegro, se ordena la actualización de las sumas liquidadas a favor del accionante, desde la fecha en que se causaron a la fecha de su pago efectivo, no puede condenarse simultáneamente, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, al pago de los intereses de mora previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, pues resultan incompatibles”.

Por estos motivos, el Despacho en aras de garantizar a la parte ejecutante su derecho de acceso a la administración de justicia y teniendo en cuenta las falencias anotadas, se lo requerirá para que las corrija, o realice las aclaraciones que sean del caso.

En consecuencia, una vez expuesto los defectos de los que adolece la demanda, la parte demandante, dentro del término legal de **diez (10) días hábiles**, deberá subsanar las irregularidades antes descritas, so pena de que el despacho tome las medidas que en derecho corresponda.

laborales dictadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que ordenan el reintegro y pago de emolumentos.

Por lo anteriormente expuesto el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER a la parte ejecutante, el término de diez (10) días para que se corrija los defectos anotados, so pena de que se tomen las medidas que en derecho corresponda.

SEGUNDO: Vencido el término anteriormente indicado, reingrese el expediente al Despacho para continuar con lo procedente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

RYGH

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 22 de septiembre 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
APODERADO EJECUTANTE:	luar-zaid@hotmail.com
PARTE EJECUTADA:	notificacionesjudiciales@subredsur.gov.co

M PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	procjudadm191@procuraduria.gov.co
--	--